



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

MAG. PONENTE:	RAMIRO APONTE PINO
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JAEI TRUJILLO SEPULVEDA
DEMANDADO:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
RADICACIÓN:	41 001 33 33 007 2019 00020 01
PROVIDENCIA:	SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACTA:	61

I.- EL ASUNTO.

Resuelve la Sala el recurso de apelación instaurado por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 23 de noviembre de 2021¹.

II.- ANTECEDENTES.

1.- La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor JAEI TRUJILLO SEPULVEDA promueve el medio de control de *nulidad y restablecimiento del derecho* contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, en procura de que se declare la nulidad del *oficio No. 2-2018-00114 del 26 de julio de 2018*; a través del cual, le negaron el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

En consecuencia, solicita que se reconozca su existencia, y que la misma se gestó entre el 24 de febrero de 1999 y el 2 de diciembre de 2015.

A título de restablecimiento del derecho, deprecia el pago de las prestaciones sociales ordinarias y otros emolumentos salariales (auxilio de transporte, bonificaciones, dotaciones, primas de junio y navidad, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías), las indemnizaciones por el pago de los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar y por la mora en el pago de las cesantías definitivas, el reintegro de los valores que le correspondía pagar a la entidad por aportes en salud y pensión, la devolución de los pagos incurridos por concepto de compra de pólizas de seguro exigidas para la

¹ Expediente digital, pdf. 023, primera instancia.

legalización de los contratos y ordenes de prestación de servicios; los valores descontados por impuesto de renta (a título de retención en la fuente), el impuesto de industria y comercio, impuestos departamentales por estampillas descontados mes a mes en cada uno de los pagos realizados por las labores desempeñadas, y que se tengan en cuenta los tiempos laborados para efectos del cómputo del tiempo en pensión y salud.

Finalmente, solicita la indexación de la condena, el cumplimiento del fallo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y ante un eventual incumplimiento del fallo, el pago de los intereses comerciales y moratorios conforme al artículo 195 del CPACA.

1.1.- Fundamentación fáctica.

Como sustento de las pretensiones, aduce lo siguiente:

a.- Aduce que laboró como instructor (prestación personal del servicio - de forma continua y sucesiva) en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila - Regional Sur del Sena, durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 1999 y el 2 de diciembre de 2015.

Su vinculación se efectuó a través de la suscripción de varios contratos de prestación de servicios.

2

b.- En dicho lapso recibió el pago de honorarios mensuales (contraprestación recibida a manera de salario).

c.-Realizaba y ejercía personalmente varias funciones, siguiendo la programación del Sena, en sus instalaciones y utilizando las herramientas suministradas por el centro de formación del Huila.

d.-Desempeñaba las funciones en las mismas condiciones que los instructores de planta, ejerciendo labores permanentes e inherentes a la actividad de formación profesional integral, en programas técnicos, tecnológicos y complementarios.

e.-Desarrollaba las actividades en constante subordinación con la entidad, sujetándose a las órdenes impartidas por el coordinador académico del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila: horarios de trabajo, permisos, requerimientos, etc.

f.- Para la legalización de cada contrato se exigía la compra de una póliza de seguro; el pago de aportes a seguridad social en salud, pensión y

riesgos profesionales. De cada pago de honorarios se descontaba el 10% de retención en la fuente y el pago de estampilla.

g.- El 14 de julio de 2018 le solicitó al Director del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila que reconociera la existencia de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho. Sin embargo, ese requerimiento fue negado por la demandada, mediante oficio 2-2018-001114 del 26 de julio de 2018.

1.2.- Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

- Constitución Política: artículos 1, 13,25 y 53
- Código Civil: artículos 1613 y 1614
- Código Sustantivo del Trabajo: artículo 24
- Ley 80 de 1993: artículo 32
- Decreto 2400 de 1968: artículo 2
- Decreto 1950 de 1973: artículo 7
- Ley 244 de 1995: artículo 2
- Decreto 2277 de 1979: artículo 2

Apoyandose en la citadas preceptivas y en un pronunciamiento jurisprudencial², considera que "...desempeñaba sus funciones de manera subordinada, toda vez que, como se demostrara en el transcurso del proceso judicial, cumplía un horario de trabajo de ocho (8) horas diarias, recibía órdenes impartidas por el Director, Subdirector y el Coordinador Académico del Centro de Desarrollo Agroempresarial, debía acatar las directrices impartidas por los funcionarios que fungían como sus superiores jerárquicos, se encontraba compelido a justificar sus inasistencias a laborar, y a participar de los programas de capacitación y promoción institucionales.

(...)

Así las cosas, el señor Jael Trujillo Sepúlveda estuvo vinculado con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para desempeñar funciones de Instructor y/o Docente, labores que se encuentran otorgadas a cargos de planta y se relacionan de forma directa con el objeto social de dicha dependencia, cuyo fin es el (sic) formación profesional y tecnológica integral.

... el carácter de permanencia de dichas funciones se ve reflejado en la celebración de 35 Contratos de Prestación de Servicios de forma sucesiva entre mi poderdante y la entidad demandada. Para abundar en razones, mi poderdante desempeñaba sus funciones en igualdad de condiciones en relación con los servidores de planta de la entidad, sin que pudiera predicarse ningún tipo de diferenciación, como quiera que, se encontraba bajo una continua y permanente subordinación ...

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Rad. 20001-23-31-000-2011-00503- 01(3517-13). C.P Alfonso Vargas Rincón.

(...)

El ejercicio de la labor docente, definida en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, implica por sí misma, subordinación en el cumplimiento de las funciones como educador, pues, debe someterse a los requerimientos de calidad de la Institución Educativa, jornada escolar fijada a los estudiantes, pensum académico diseñado a nivel institucional, horarios, evaluaciones y reuniones en los términos dictados por los directivos del centro de formación.

Finalmente, refiere que el H. Consejo de Estado ha establecido que "... el ejercicio de la profesión docente implica subordinación laboral, al no poder ejecutar de forma independiente sino de acuerdo a los lineamientos, parámetros y órdenes del establecimiento educativo ...". Por lo tanto, "... las funciones ejercidas por los Instructores del SENA se enmarcan dentro de los parámetros de una relación laboral (expediente digital, cuaderno digitalizado – principal 01, primera instancia).

2.- La oposición.

Luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos (aceptando parcialmente algunos y negando otros), se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que se celebraron contratos de prestación de servicios con el demandante, siguiendo los parámetros del artículo 32-3º de la Ley 80 de 1993; que dispone "en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales".

Descarta que se estructuren los elementos de un contrato de trabajo; porque la contratación fue temporal (con interrupciones en su ejecución), los servicios se circunscribieron a áreas específicas (de acuerdo al perfil académico), se desarrollaron con autonomía e independencia y se cancelaron mensualmente los honorarios pactados.

La entidad "le suministró la programación académica básica que debía desarrollarse de acuerdo a la programación de las actividades contractuales, y como es natural, superviso (sic) a través de los mecanismos autorizados por la Ley el cumplimiento de las obligaciones contractuales". Destacando que no existió subordinación y que "Las entidades públicas están en plena atribución de pactar o trazar las directrices o instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad de cómo debe cumplir con sus obligaciones el contratista, sin que ello se traduzca en dependencia o carencia de autonomía de parte del contratista por ser necesaria y obligatoria la supervisión, so pena de incurrir en un detrimento patrimonial para el estado, en perjuicio para los beneficiarios del servicio, omisión en los deberes de la función pública (sic), vulneración de los fines del Estado, o incluso en una paralización del servicio público que brinda la entidad. El SENA Regional Huila nunca hizo uso del poder disciplinario y subordinado sobre el contratista, tampoco le impuso prohibiciones, menoscabo o interfirió la manera de ejecutar la labor contratada; o impartió ordenes o instrucciones ajenas al objeto del contrato ...".

Aclara que para el cumplimiento de sus objetivos, el Sena se requiere contratar servicios profesionales de particulares, y que esa vinculación

se realiza siguiendo los “procedimientos de selección señalados en el estatuto de contratación, leyes concordantes o modificatorias y sus decretos reglamentarios que han estado vigentes en cada momento, como lo son, entre otros, el Decreto 855 de 1994, el Decreto 2170 de 2002, el Decreto 066 de 2008, el Decreto 2474 de 2008 y actualmente el 734 de 2012, el cual próximamente será modificado”.

Apoyándose en un pronunciamiento del H. Consejo de Estado³, refiere que de acuerdo con su perfil académico, la actividad que debía ejecutar el actor está prevista en el artículo 32-3° de la Ley 80 de 1993, y que el medio de control que procede es el de controversias contractuales y no el de nulidad y restablecimiento del derecho⁴.

Recuerda que la Corte Suprema de Justicia⁵ y el Consejo de Estado⁶ consideran que “... el cumplimiento de un horario, por sí solo no es suficiente para configurar la subordinación... El cumplimiento de un horario, es tan solo un elemento indiciario mas no una prueba definitiva ...”.

Con base en pronunciamientos del H. Consejo de Estado⁷ y del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva⁸ (que resolvieron casos similares); estima que el acto enjuiciado fue expedido por una funcionaria competente y no se probó que vulnerará precepto alguno, manteniéndose incólume su presunción de legalidad.

Con base en ese razonamiento, como exceptivas propone la *presunción de legalidad, inexistencia del vínculo o relación laboral, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, ineptitud sustantiva de la demanda, inexistencia de objeto de la acción incoada y la genérica* (expediente digital, cuaderno digitalizado – principal 06, primera instancia).

³ Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P Alberto Arango Mantilla.

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección "B". Sentencia del 31 de octubre de 2002. Rad. 2001-23-21-000-1999-00756-01 - (1420-2001). C.P Alejandro Ordoñez Maldonado.

⁵ Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de mayo de 2001. Exp.15678. M.P José Roberto Herrera Vergara.

⁶ Sala Plena del Consejo de Estado. Sentencia del 18 de noviembre de 2003. Rad. IJ-0039, M.P. Nicolás Pájaro Peharand.

⁷ Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 12 de julio de 2018. Rad. 47001233300020149000901.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 21 de marzo de 2019. Rad. 47001233300020140006901.

⁸ Sentencia del 10 de abril de 2019. Juez Jesús Orlando Parra.

3.- Alegaciones de conclusión en primera instancia.

3.1- Parte demandante.

Después de referirse un precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado⁹ y analizar la diferencia que existe entre una relación laboral y los contratos de prestación de servicios¹⁰; destaca que en la vinculación del demandante es evidente la subordinación, porque "... prestó sus servicios de manera diaria, dentro de las instalaciones de la entidad y cumpliendo un horario de trabajo, sometido a los lineamientos y programadas curriculares, lo que prueba una continuada subordinación y dependencia, que permite desvirtuar el elemento de autonomía e independencia del instructor contratista como elemento esencial del contrato de prestación de servicios ..." (expediente digital, pdf. 021, primera instancia).

3.2- Servicio Nacional de Aprendizaje.

Reitera los argumentos esbozados al contestar la demanda, destacando que "... no existe argumento ni prueba alguna que controvierta la legalidad del acto demandado y de los testimonios rendidos por los señores Irizar Hugo Embus Salazar y Jorge Antonio Castillo, no puede concluirse que entre el SENA y el demandante existió una verdadera relación laboral derivada de cada uno de los contratos suscritos entre él y el SENA, quiero resaltar que de parte del señor Irizar Hugo Embus Salazar existe además un interés personal, pues él mediante apoderado – el mismo del señor Trujillo Sepúlveda – presentó demanda con características y pretensiones similares en contra del SENA Rad. 2018- 00408-00 que se tramita en el Juzgado 8° Administrativo Oral de Neiva, la pretensión principal de dicha demanda es que el SENA reconozca que entre él y la entidad existió una relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios con él suscritos, y por consiguiente le pague emolumentos salariales y prestacionales, lo cual evidentemente, le resta objetividad e imparcialidad a su testimonio ..." (expediente digital, pdf. 019, primera instancia).

3.3.- Ministerio Público.

No rindió concepto (expediente digital, pdf. 022, primera instancia).

4. - El fallo objeto de impugnación.

A través del fallo impugnado, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva denegó las pretensiones de la demanda, argumentado que la

⁹ Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Exp. 20001 23 31 000 2011 00503 01. Sentencia del 10 de septiembre de 2014.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2020-03786-00(AC). Sentencia del 22 de octubre de 2020.

¹⁰ Corte Constitucional. C-614 de 2009.

parte demandante no logró acreditar la subordinación o dependencia permanente del actor frente a la entidad ni la continuidad en el ejercicio de las labores y la equidad con los servidores públicos de planta:

"... no está acreditado que realizara una actividad igual a la de un empleado público; no está probado, ni siquiera mínimamente, que cumpliera o siguiera instrucciones o exigencias relativas a la forma en que el servicio debía prestarse desde el punto de vista legal y reglamentario, que permitiera presumir que estaba ante el sometimiento al ordenamiento jurídico ... no se probaron algún tipo de órdenes emitidas por el superior jerárquico las cuales tuvieran como origen una norma legal o reglamentaria. Por el contrario, lo que se advierte por parte de la demanda es la exigen (sic) en el cumplimiento de unas obligaciones contractuales a propósito del objeto contratado, lo cual, dista ostensiblemente de que al demandante le fueran exigibles deberes desde el punto (sic) de vista legal y reglamentario, como ocurre respecto de los servidores públicos, en este caso, los docentes de planta del Sena ...".

Como sustento, abordó el marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad¹¹, sus elementos y la carga probatoria. Le restó valor probatorio a los testimonios, y recordó que al analizar un caso similar el H. Consejo de Estado¹² coligió que los instructores se pueden vincular al Sena como empleados públicos de carrera administrativa o provisionales, o mediante contrato de prestación de servicios, y que cualquier tipo de vinculación es plenamente legal y válida:

"Resta precisar que la vinculación de instructores es una actividad de especial importancia para la entidad, por ser indispensable para la ejecución de su objeto principal y que esta puede darse a través de una relación legal y reglamentaria, como empleado público de carrera administrativa o provisional, o mediante contrato de prestación de servicios, pues ello ha sido permitido y reglamentado por el Estatuto de Contratación y los manuales de funciones y circulares expedidos por el Sena.

¹¹ Cita de cita. Ver, en: SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "B". Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015). Radicación número: 81001-2333-003-2013- 00057-01(3361-14). Sección Segunda, Subsección "B", Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 16 de febrero de 2012, expediente No. 41001-23-31-000-2001-00050-01(1187-11).

Cita de cita. Sala de lo Contencioso Administrativo. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. Bogotá, D.C., cuatro (04) de febrero de 2016. Radicación número: 05001- 23-31-000-2010-02195-01(1149-15).

Cita de cita. Sentencia del 15 de junio de 2011, expediente No. 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10).

Cita de cita. Sentencia del 4 de marzo de 2010, proferida dentro del expediente con radicación No. 85001-23-31-000- 2003-00015-01(1413-08).

Cita de cita. Consejero ponente: Carmel Perdomo Cuéter. Bogotá, D.C. SU-2 No.005/16 veinticinco 25 de agosto de dos mil dieciséis (2016). Expediente 23001233300020130026001 (00882015).

¹² Cita de cita. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19).

Además, la elaboración, orientación, formulación o implementación de proyectos de formación, lleva consigo una obligación de hacer debido a la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia para la ejecución de las labores contratadas, pero no por ello tiene que considerarse como una actividad sujeta a subordinación o dependencia” (expediente digital, pdf. 023, primera instancia).

5.- La impugnación.

Inconforme, el actor interpuso el recurso de apelación; argumentando que se desconoció el precedente del H. Consejo de Estado donde se analiza la subordinación especial en las labores de carácter docente¹³ (aplicable a los contratos de los instructores). Destacando el pronunciamiento de unificación del 25 de agosto de 2016¹⁴; en el cual, se puede colegir que “... la labor de los docentes contratistas no es independiente ni se desarrolla en virtud de la coordinación propia de los contratos de prestación de servicios, por el contrario, la subordinación es natural a dicho ejercicio ...”.

En reciente fallo de tutela¹⁵ dicha Colegiatura precisó que la labor de los instructores del Sena es de naturaleza docente; por ese motivo se deben aplicar las reglas contenidas en la sentencia de unificación, analizando la subordinación como un elemento implícito cuya acreditación es flexible en comparación con los demás casos de contrato realidad.

Después de analizar el marco normativo de la labor docente desarrollada por los instructores del Sena, enlista las funciones que desarrolló el actor, resaltando son de naturaleza subordinantes, porque “... el instructor contratista no solo debía desarrollar las acciones de formación (clases), sino también participar en equipos de desarrollo curricular, procesos de inducción, gestión de proyectos, apoyo a la supervisión de contratos, verificación de propuestas en procesos de contratación, reuniones de trabajo, así como el cuidado de bienes y equipos, y el cumplimiento estricto del horario de las acciones de formación, todas y cada una bajo el requerimiento y discrecionalidad del SENA a través de su Coordinador Académico ...”.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 22 de marzo de 2012, número único de radicación 05001 23 31 000 2003 03063 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 12 de mayo de 2014, número único de radicación 05001 23 31 000 2005 06806 01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, número único de radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Fallo de Tutela del 22 de octubre de 2020, CP. Hernando Sánchez Sánchez, Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03786-00(AC).

De otro lado, destaca que las cláusulas contractuales pactadas no implican la renuncia a la subordinación¹⁶; por el contrario, ello avizora el cumplimiento estricto de un horario (diseñado por el coordinador académico) y cronogramas para el desarrollo de los programas de formación (de ello dan fe los testimonios).

La presentación de informes, visitas del coordinador académico, lugar de prestación del servicio, el pensum académico y el superior jerárquico (coordinador académico), eran elementos comunes a los docentes de planta y a los contratistas.

Al relacionar el tiempo de servicio, el *a quo* no valoró los contratos 124 del 4 de mayo de 2004 (3 meses), 416 del 9 de septiembre de 2004 al 29 de diciembre de 2004; la prórroga del contrato 040 de 2006 (hasta el 15 de marzo de 2007).

Resalta que los intervalos de los contratos de prestación de servicios no corresponden a los tiempos consignados en los informes del instructor y las fichas de los programas de formación; porque que el demandante continuaba impartiendo sus clases hasta que finalizaba la acción de formación, y así no hubiera un contrato de prestación de servicios que soportara las labores de carácter docente desempeñadas, el Sena continuaba programándole clases; lo cual, significa que la relación laboral se extendía más allá de su vigencia.

Con base en pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Antioquia¹⁷ y del H. Consejo de Estado¹⁸, colige que esas interrupciones no tienen la entidad suficiente para finalizar la continuidad de la relación laboral; y al no existir interrupción desde el 24 de febrero de 1999 y el 2 de diciembre de 2015, a partir de esta última fecha se inicia el computo del término de prescripción trienal, y en razón a que la reclamación se presentó el 14 de julio de 2018, no acaeció el fenómeno prescriptivo (expediente digital, pdf. 025, primera instancia).

6.- Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a.- Parte actora.

Guardó silencio.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 22 de marzo de 2012, número único de radicación 05001 23 31 000 2003 03063 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón

¹⁷ Cita de cita. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, Sentencia del 26 de agosto de 2014, MP. Jorge Iván Duque Gutiérrez. RADICADO: 05001-23-33-000-2012-00391-00.

¹⁸ Cita de cita. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 13 de mayo de 2015, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. REF: EXPEDIENTE No. 680012331000200900636 01.

b.-Sena.

Guardó silencio.

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1.- La competencia.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso instaurado contra el fallo de primera instancia; amén de que no se advierten falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

2.- El problema jurídico.

En razón a que el fallo fue impugnado únicamente por la parte actora, al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso¹⁹ (aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA), solo se abordarán los reparos esgrimidos en la alzada.

En tal virtud, el asunto litigioso se contrae a establecer si en la relación que existió entre el demandante y el Sena entre las anualidades 1999 y 2015 estructuraron los elementos constitutivos de una relación de trabajo. En consecuencia, si tiene derecho a percibir los derechos salariales y prestacionales reclamados.

3. Lo probado.

En la prueba documental se encuentra acreditado lo siguiente:

a.- El Servicio Nacional de Aprendizaje y el actor suscribieron los contratos/órdenes de prestación de servicios que se enlistan en el siguiente cuadro; con el objeto de desarrollar procesos de formación en el área de informática en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila (f. 93 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 01

¹⁹ Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

digitalizado, primera instancia – pdf 002 cuaderno principal 06 digitalizado, primera instancia – pdf 013 expediente digital, primera instancia).

N° contrato/orden	Periodo	Valor
No. 0163 Suscrita el 18 de febrero de 1999	24-02-1999 al 23-05-1999 3 meses	\$800.000
No. 582 Suscrita el 18 de junio de 1999	16-07-1999 al 15-10-1999 3 meses	\$800.000
No. 1005 Suscrito el 4 de octubre de 1999	8-10-1999 al 7-12-1999 2 meses	\$1.200.000
No. 158 Suscrito el 2° de febrero de 2000	16-02-2000 al 15-05-2000 3 meses	\$800.000
No. 431 Suscrito el 17 de abril de 2000	9-05-2000 al 8-07-2000 2 meses	\$640.000
N° 648 Suscrito el 5 de julio de 2000	25-7-2000 al 24-09-2000 2 meses	\$640.000
No. 930 Suscrito el 17 de octubre de 2000	10-11-2000 al 24-12-2000 1.5 meses	\$640.000
No. 208 Suscrito el 15 de febrero de 2001	02-03-2001 al 01-06-2001 3 meses	\$3.330.000
No. 442 Suscrito el 7 de mayo de 2001	24-05-2001 al 23-07-2001 2 meses	\$2.886.000
No. 641 Suscrito el 31 de julio de 2001	10-08-2001 al 09 -10-2001 2 meses	\$1.110.000

No. 750 Suscrito el 1° de octubre de 2001	03-10-2001 al 02-12-2001 2 meses	\$1.332.000
N° 939 Suscrito el 4 de diciembre de 2001	05-12-2001 al 21-12-2001 17 días	\$888.000
No. 125 Suscrito el 27 de febrero de 2002	01-04-2002 al 30-06-2002 3 meses	\$4.640.000
No. 339 Suscrito el 6 de junio de 2002	13-06-2002 al 12-08-2002 2meses	\$1.440.000
No. 52 Suscrito el 10 de febrero de 2003	17-02-2003 al 27-06-2003 4 meses, 10 días	\$4.560.000
No. 315 Suscrito el 22 de septiembre de 2003	29-09-2003 al 27-02-2004 4 meses, 29 días	\$6.600.000
No. 124 Suscrito el 4 de mayo de 2004	28-05-2004 al 27-08-2004 3 meses	\$6.500.000
No. 416 Suscrito el 9 de septiembre de 2004	15-09-2004 al 29-12-2004 3 meses, 14 días	\$7.000.000
No. 598 Suscrito el 23 de diciembre de 2004	28-12-2004 al 30-06-2005 6 meses, 2 días	\$9.100.000
No. 32 Suscrito el 5 de agosto de 2005	11-08-2005 al 31-12-2005 4 meses, 20 días	\$10.808.000
Adición No. 1	01-01-2006 al 30-09-2006 9 meses	\$5.162.500

No. 040 Suscrito el 2 de agosto de 2006	03-08-2006 al 28-12-2016 4 meses, 25 días	\$7.670.000
Adición No. 1 Suscrita el 21 de diciembre de 2006	29-12-2006 al 15-03-2007 2 meses, 15 días	\$3.687.500
No. 39 Suscrito el 13 de junio de 2007	04-07-2007 al 15-12-2007 5 meses, 11 días	\$10.067.200
No. 27 Suscrito el 4 de abril de 2008	04-04-2008 al 03-10-2008 6 meses o hasta agotar presupuesto estimado	\$9.600.000
Adición No. 1 Suscrita el 03 de octubre de 2008	05-10-2008 al 04-11-2008 1 mes	\$1.600.000
No. 84 Suscrito el 02 de julio de 2009	02-07-2009 al 17-12-2009 5 meses, 15 días	\$9.900.000
No. 62 Suscrito el 26 de enero de 2010	26-01-2010 al 11-12-2010 10 meses, 15 días	\$21.000.000
No. 105 Suscrito el 01 de abril de 2011	01-04-2011 al 30-06-2011 3 meses	\$6.735.000
No. 173 Suscrito el 12 de julio de 2011	12-07-2011 al 17-12-2011 5 meses, 5 días	\$11.599.167

No. 048 Suscrito el 23 de enero de 2012	23-01-2012 al 21-06-2012 4 meses, 29 días	\$9.933.333
No. 195 Suscrito el 17 de julio de 2012	17-07-2012 al 08-12-2012 4 meses, 21 días	\$9.400.000
No. 541 Suscrito el 01 de febrero de 2013 Adición y prorroga No. 001 Suscrita el 15 de noviembre de 2013	01-02-2013 al 30-11-2013 10 meses 01-12-2013 al 13-12-2013 13 días	\$20.600.000 \$892.667
No. 525 Suscrito el 21 de enero de 2014	21-01-2014 al 30-08-2014 7 meses, 9 días	\$16.425.000
No. 482 Suscrito el 27 de enero de 2015	27-01-2015 al 01-12-2015 10 meses y 4 días	\$23.484.000

b.- El Subdirector del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila certificó que el actor prestó sus servicios en los siguientes periodos (f. 74 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 01 digitalizado, primera instancia):

N° contrato/orden	Periodo
163 de 1999	24/02/1999 al 23/05/1999 2 meses, 28 días
582 de 1999	16/07/1999 al 15/10/1999 3 meses, 1 día

1005 de 1999	08/10/1999 al 17/12/1999 2 meses, 10 días
158 de 2000	16/02/2000 al 15/05/2000 2 meses, 29 días
208 de 2000	2/03/2000 al 1/06/2000 3 meses, 1 día
431 de 2000	9/05/2000 al 8/06/2000 1 mes
648 de 2000	25/07/2000 al 24/09/2000 2 meses, 1 día
930 de 2000	10/11/2000 al 22/12/2000 1 mes, 12 días
442 de 2001	24/05/2001 al 23/07/2001 2 meses
641 de 2001	10/08/2001 al 2/10/2001 13 meses, 28 días
750 de 2001	3/10/2001 al 2/12/2001 2 meses
939 de 2001	5/12/2001 al 21/12/2001 16 días
125 de 2002	1/04/2002 al 12/06/2002 2 meses, 12 días

339 de 2002	13/06/2002 al 12/08/2002 2 meses
52 de 2003	17/02/2003 al 27/06/2003 4 meses, 10 días
315 de 2003	29/09/2003 al 27/02/2004 5 meses, 1 día
598 de 2004	28/12/2014 al 30/06/2005 6 meses, 4 días
32 de 2005	11/08/2005 al 30/09/2006 13 meses, 25 días
40 de 2006 Adición	03/08/2006 al 28/12/2006 4 meses, 27 días Hasta el 28/12/2006
39 de 2007	05/07/2007 al 15/12/2007 5 meses, 13 días
27 de 2008	04/04/008 al 02/11/2008 7 meses, 2 días
62 de 2009	02/07/2009 al 16/12/2009 5 meses, 15 días
60 de 2010	26/01/2010 al 10/12/2010 10 meses, 15 días
101 de 2011	01/04/2011 al 30/06/2011 3 meses

173 de 2011	12/07/2011 al 16/12/2011 5 meses, 5 días
48 de 2012	23/01/2012 al 23/06/2012 5 meses, 1 día
195 de 2012	17/07/2012 al 07/12/2012 4 meses, 21 días
856 de 2013 Adición	01/02/2013 al 13/12/2013 10 meses, 13 días Hasta el 13/12/2013
525 de 2014 Adición	22/01/2014 al 31/08/2014 7 meses, 9 días 01/09/2014 al 30/11/2014
482 de 2015	28-1-2015 al 2-12-2015 10 meses – 4 días

c.- El pago de los emolumentos de varios de los anteriores periodos se acreditaron con los comprobantes de pago/egresos (f. 177 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 01 digitalizado, f. 2 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 02 digitalizado, primera instancia)

d.- Asistido de apoderado judicial, el 16 de julio de 2018 el demandante le solicitó al Director del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila que le reconociera la existencia de un contrato realidad derivado de las labores que en calidad de instructor desarrolló desde el 24 de febrero 1999 y el 2 de diciembre de 2015.

En consecuencia, que le reconociera y pagara las prestaciones sociales ordinarias, emolumentos salariales, las indemnizaciones por los aportes parafiscales dejados de pagar, la mora por el pago de las cesantías

definitivas, el reintegro de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión; la devolución de los valores asumidos por el pago de pólizas de seguro en la legalización de los contratos, el impuesto de renta a título de retención en la fuente, el impuesto de industria y comercio e impuestos departamentales por estampillas (f. 32 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 01 digitalizado, primera instancia).

e.- A título de respuesta, el Servicio Nacional de Aprendizaje expidió el oficio 2-2018-001114 del 26 de julio de 2018, negando su requerimiento en los siguientes términos:

"... Entre el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Hulla - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el señor Jael Trujillo Sepulveda (sic), identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.686.503, NO existió relación laboral alguna, tal y como se estableció en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el SENA y su poderdante ...".

"... Como consecuencia de la inexistencia de la relación laboral entre el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Hulla - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el señor Jael Trujillo Sepulveda, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.686.503, no es procedente reconocer y pagar las prestaciones sociales ordinarias y otros emolumentos salariales causados, toda vez que entre el SENA y el señor Jael Trujillo Sepulveda, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.686.503, se celebró dentro del marco jurídico establecido en el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, contratos de prestación de servicios, dentro de los cuales se afirma de manera categórica que "en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales ..." (f. 28 y ss. pdf. 001 cuaderno principal 01 digitalizado, primera instancia).

f.- En el proceso se recepcionaron los siguientes testimonios:

i).- Irizar Hugo Embus Salazar.

Profesional, 57 años, reside en la Plata. Tramita un proceso por similares pretensiones. Conoce al actor hace aproximadamente 23 años (a partir del año 1999), cuando ingresó a laborar en el Sena, porque él venia laborando hacía años en la entidad.

Refiere que la vinculación del demandante era por prestación de servicios en el área de sistemas, y que lo asesoró en los cursos que él dictaba en el área rural (desde el año 1999 hasta el 2003). A a partir de la última anualidad coincidían en reuniones y actividades generales de la institución.

En el área rural la asesoría se prestaba de 7:00 a 12:00 am, y de 1:00 a 4:00 pm (se debían cumplir 8 horas diarias). Consistía en capacitar a los aprendices en el área de sistemas básica. El horario se establecía de acuerdo con el programa, y estaban subordinados a las indicaciones del coordinador. También existía un líder, quien se encargaba de reportar la

asistencia puntual. Ante un eventual incumplimiento del horario no se pagaba el sueldo o se podía anular el contrato.

Afirma que el actor fungió como instructor hasta el 2015 (aproximadamente). Durante el tiempo que estuvo con él laboró en las veredas Monserrate, Belén, y en los municipios de Nátaga - Tesalia, Pérez, Belalcázar e Inzá (departamento del Cauca).

Todos los instructores presentaban un informe de las áreas donde realizaban las capacitaciones. Inicialmente se presentaban en un formato y a partir del año 2005 se presentaban en el sistema y de forma física. Informes que también presentaban los instructores de planta.

El coordinador académico era el superior de todos los instructores (vinculados de planta o por contrato). El superior verificaba con los aprendices si asistían a clases y el cumplimiento del pensum. Los planes de estudio se descargaban a través de una plataforma.

ii).- Jorge Antonio Castillo Solórzano.

35 años, ingeniero de sistemas, especialista, vinculado actualmente como docente en la Secretaría de Educación Departamental.

Conoce al demandante desde el año 2015, cuando se vinculó con el Sena, y este fue su apoyo en su ingreso, porque realizaban labores como ingenieros; es decir, capacitaban a los estudiantes de colegio en el área de sistemas.

19

El demandante sirvió en la inspección Monserrate de La Plata, en la Institución Educativa Pastrana, en el área urbana, en Pacarní -Tesalia, inspección de Belén del municipio de La Plata. Prestaba servicios complementarios en el centro y en el área de influencia de esa localidad.

Cumplían horario, Jael los lunes y los martes en la mañana estaba en Monserrate, en la tarde en La Pastrana (en La Plata) y por la noche orientaba complementarios en el centro en el Sena. Los miércoles en Pacarní, los jueves en Belén, los viernes orientaba complementarios en el centro y los sábados en la vereda.

Laboraban 8 horas diarias y 160 horas mensuales. El cronograma de trabajo lo aportaba el coordinador. Ante un eventual incumplimiento del horario no se pagaba el sueldo o se podía anular el contrato.

Se presentaban informes mensuales, porque era uno de los requisitos para tramitar la cuenta de cobro. Estos informes se rendían en el sistema Sofia y en físico. El contrato era supervisado por el coordinador

académico y por la líder del grupo, quien era la jefe directa de ellos.

Los planes de estudio los suministraba la coordinación académica (de un banco de diseños curriculares) y recibían capacitaciones de otros instructores del Sena.

4.- El marco normativo y jurisprudencial del *contrato realidad*. Sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.

Al abordar el análisis de esta institución, el H. Consejo de Estado clarificó varios tópicos; en especial, los efectos que se pueden derivar de la celebración de un contrato de prestación de servicios con entidades públicas, sus limitaciones legales y la solución judicial cuando se utiliza artificiosamente para encubrir una relación laboral. Y entre las conclusiones²⁰ más relevantes, es pertinente destacar las siguientes:

a.- En el régimen jurídico Colombiano coexisten tres clases de vinculaciones con las entidades públicas: i) empleados públicos (relación legal y reglamentaria); ii) trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y iii) contratistas por prestación de servicios (relación contractual estatal). En el último caso, cuando sus elementos esenciales se desnaturalizan, los litigios que se susciten debe dirimirlos la justicia ordinaria (si la relación se asemeja a la de un trabajador oficial) o la jurisdicción contenciosa administrativa (en caso de que ejerzan funciones propias de un empleado público).

b.- El artículo 32-3º de la Ley 80 de 1993, establece la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios, con el único fin de desarrollar actividades relacionadas con la administración o con el funcionamiento de la entidad; advirtiendo, que quien lo suscribe adquiere la calidad de contratista y que del mismo no se puede derivar el reconocimiento de prestaciones sociales.

Es más, el Decreto 1950 de 1973 (artículo 7º), prescribe que no se pueden celebrar contratos de esta naturaleza para desempeñar funciones públicas de carácter permanente. Entre tanto, el artículo 48, numeral 29 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), tipifica como falta gravísima la celebración de contratos de prestación de servicios que exijan una dedicación de tiempo completo, subordinación y desconocimiento de la autonomía del contratista.

c.- Cuando se generan derechos derivados de un vínculo laboral gestado artificiosamente a través de contratos de prestación de servicios; se debe garantizar la prevalencia de la *realidad sobre las formas establecidas por*

²⁰ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2017. C.P. Dr. Cesar Palomino Cortes. Radicación: 81001-23-33-000-2013-00072-01(3419-14).

los sujetos de las relaciones laborales (artículo 53 de la Carta Política); cuya consecuencia jurídica es la protección del derecho al trabajo, y de contera, el reconocimiento de los beneficios prestacionales.

d.- El denominado contrato de prestación de servicios se desnaturaliza cuando se demuestra la presencia de los tres elementos constitutivos de una relación laboral; esto es, i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración, y iii) la continuada subordinación laboral; lo cual, le otorga al contratista el derecho a obtener el pago de prestaciones sociales; en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales²¹.

e.- Cuando se acredita que una relación laboral se desfiguró acudiendo a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, a título de indemnización se deben reconocer "...las prestaciones sociales que el contratista dejó de devengar con ocasión de la modalidad de vinculación a través de contratos de prestación de servicios, y tener ese tiempo como efectivamente laborado para efectos pensionales. La liquidación de las prestaciones sociales se hará con base en los honorarios pactados en los contratos suscritos entre la entidad y el demandante"²².

f.- Al declarar la existencia de una relación de carácter laboral, es necesario diferenciar las prestaciones asumidas directamente por el empleador y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el sistema de seguridad social integral.

21

Entre las que están a cargo del empleador, se encuentran las ordinarias o comunes: las primas y las cesantías. Las que están a cargo del sistema integral de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema, debe mediar una cotización.

En presencia de un contrato de trabajo o cuando se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarla el empleador, en lo que corresponde al sistema de riesgos profesionales y al sistema de subsidio familiar. En el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y por el empleado en forma compartida, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley. La cotización al sistema de pensiones es el 16% del ingreso laboral (75% por el empleador y 25% por el empleado); la cotización al sistema de

²¹H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

²² Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

salud es el 12.5% de lo netamente devengado, correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado el 4%²³.

En reciente pronunciamiento²⁴, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado profirió sentencia de unificación, fijando tres reglas jurisprudenciales en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

i).- El concepto "*término estrictamente indispensable*", al que alude el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato (atendiendo el principio de planeación); por lo tanto, se justifica en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la administración, que debe ser esencialmente temporal, y de ninguna manera con ánimo de permanencia.

ii).- Para que no opere la solución de continuidad, se estableció un lapso de 30 días hábiles (contado entre la finalización de un contrato y el inicio de la ejecución del siguiente), y cuando el mismo se excede, se podrá flexibilizar, atendiendo las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas en el expediente.

iii).- En lo relacionado con la omisión de afiliar al contratista al sistema de seguridad social en salud (por parte de la administración); es improcedente la devolución de los valores que este hubiera asumido de más, porque los mismos se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

iv).- Al abordar los elementos consustanciales de la relación laboral, precisó que los siguientes eventos -consolidados- pueden interpretarse como indicios de una clara e inequívoca *subordinación continuada*:

"...2.3.3.2. Subordinación continuada.

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

²³ Consejo de Estado. Sección Segunda-Subsección B. Sentencia de 16 de mayo de 2017. Radicación número: 81001-23-33-000-2013-00072-01(3419-14). C.P. Dr. César Palomino Cortés.

²⁴ SUJ-025-CE-S2-2021. Sentencia de unificación de jurisprudencia del 9 de septiembre de 2021.

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto

grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral...”.

4. Análisis de fondo.

4.1. Al abordar el análisis de un asunto similar, en reciente pronunciamiento el H. Consejo de Estado²⁵ coligió que la función que desarrollan los instructores del Sena se orienta a brindar una formación integral, profesional y laboral de los estudiantes (que culmina con la expedición de certificados, títulos y grados). Por lo tanto, se encuentra regulada por las normas generales del servicio público de educación (Ley 115 de 1994).

4.2. Cómo ya se indicara, el impugnante considera que su vinculación a través de los contratos de prestación de servicios fue un instrumento utilizado para encubrir una relación de estirpe laboral con el Sena; en la cual, fungió en calidad de *instructor*. Destacando, que contrario a lo colegido por el *a quo*, se probó el elemento de subordinación y la continuidad en el servicio.

Al respecto, es del caso puntualizar lo siguiente:

a. Las diferentes piezas documentales dan cuenta que el Sena y el actor suscribieron 32 órdenes/contratos de prestación de servicios, con el objeto de impartir formación en el área de sistemas; en los siguientes periodos:

Nº	Nº contrato/orden	Periodo	Objeto	Interrupciones
1	No. 0163 Suscrita el 18 de febrero de 1999	24-02-1999 al 23-05-1999 3 meses	Dictar 100 horas en el área de informática básica	N/A
2	No. 582 Suscrita el 18 de junio de 1999	16-07-1999 al 15-10-1999 3 meses	Dictar 100 horas en el área de informática básica	1 mes, 22 días
3	No. 1005 Suscrito el 4 de octubre de 1999	8-10-1999 al 7-12-1999 2 meses	Dictar 150 horas de formación profesional	N/A

²⁵ Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2023, Rad: 25000-23-42-000-2019-01338-01 (2536-2022), C.P César Palomino Cortés.

4	No. 158 Suscrito el 2º de febrero de 2000	16-02-2000 al 15-05-2000 3 meses	Dictar 100 horas de formación profesional	2 meses, 8 días
5	No. 431 Suscrito el 17 de abril de 2000	9-05-2000 al 8-07-2000 2 meses	Dictar 80 horas de formación profesional	N/A
6	Nº 648 Suscrito el 5 de julio de 2000	25-7-2000 al 24-09-2000 2 meses	Dictar 80 horas de formación profesional	16 días
7	No. 930 Suscrito el 17 de octubre de 2000	10-11-2000 al 24-12-2000 1.5 meses	Dictar 80 horas de formación profesional	15 días
8	No. 208 Suscrito el 15 de febrero de 2001	02-03-2001 al 01-06-2001 3 meses	Dictar 300 horas de formación profesional	2 meses, 5 días
9	No. 442 Suscrito el 7 de mayo de 2001	24-05-2001 al 23-07-2001 2 meses	Dictar 260 horas de formación profesional	N/A
10	No. 641 Suscrito el 31 de julio de 2001	10-08-2001 al 09-10-2001 2 meses	Dictar 100 horas de formación profesional	16 días
11	No. 750 Suscrito el 1º de octubre de 2001	03-10-2001 al 02-12-2001 2 meses	Dictar 120 horas de formación profesional	N/A
12	Nº 939 Suscrito el 4 de diciembre de 2001	05-12-2001 al 21-12-2001 17 días	Dictar 80 horas de formación profesional	2 días
13	No. 125 Suscrito el 27 de febrero de 2002	01-04-2002 al 30-06-2002 3 meses	Dictar 380 horas de formación profesional	3 meses, 9 días

14	No. 339 Suscrito el 6 de junio de 2002	13-06-2002 al 12-08-2002 2 meses	Dictar 120 horas de formación profesional	N/A
15	No. 52 Suscrito el 10 de febrero de 2003	17-02-2003 al 27-06-2003 4 meses, 10 días	Prestar sus servicios como profesional y docente en informática, para dictar 380 conferencias	6 meses, 4 días
16	No. 315 Suscrito el 22 de septiembre de 2003	29-09-2003 al 27-02-2004 4 meses, 29 días	Prestar sus servicios como profesional y docente en informática básica, para dictar 550 conferencias	3 meses, 1 día
17	No. 124 Suscrito el 4 de mayo de 2004	28-05-2004 al 27-08-2004 3 meses	Prestar sus servicios como instructor dictando 500 conferencias de informática básica	3 meses
18	No. 416 Suscrito el 9 de septiembre de 2004	15-09-2004 al 29-12-2004 3 meses, 14 días	Prestar sus servicios como instructor para dictar 500 conferencias de informática básica	18 días
19	No. 598 Suscrito el 23 de diciembre de 2004	28-12-2004 al 30-06-2005 6 meses, 2 días	Prestar sus servicios como instructor para dictar 650 clases en el área de informática básica	N/A
20	No. 32 Suscrito el 5 de agosto de 2005 Adición No. 1	11-08-2005 al 31-12-2005 4 meses, 20 días 01-01-2006 al 30-09-2006	Prestar sus servicios como profesional y docente para dictar 700 horas de formación regular en el área de informática.	1 mes, 11 días

		9 meses	Adiciona 350 horas	N/A
21	No. 040 Suscrito el 2 de agosto de 2006	03-08-2006 al 28-12-2016 4 meses, 25 días	Prestar sus servicios como tecnólogo y docente para dictar 520 clases en el área de informática y demás que sean afines	N/A
	Adición No. 1 Suscrita el 21 de diciembre de 2006	29-12-2006 al 15-03-2007 2 meses, 15 días	Adiciona 250 horas	N/A
22	No. 39 Suscrito el 13 de junio de 2007	04-07-2007 al 15-12-2007 5 meses, 11 días	Prestar sus servicios como técnico e instructor para dictar 650 clases de formación presencial y/o virtual (Blackboard) en el área de informática	3 meses, 18 días
23	No. 27 Suscrito el 4 de abril de 2008	04-04-2008 al 03-10-2008 6 meses	Prestación de servicios personales como instructor dentro del programa de formación de la vigencia 2008	3 meses, 18 días
	Adición No. 1 Suscrita el 03 de octubre de 2008	05-10-2008 al 04-11-2008 1 mes	Adiciona 1 mes	1 día
24	No. 84 Suscrito el 02 de julio de 2009	02-07-2009 al 17-12-2009 5 meses, 15 días	Prestar servicios técnicos de carácter temporal como instructor dentro del programa que el centro de formación ejecute durante	7 meses, 27 días

			la vigencia 2009	
25	No. 62 Suscrito el 26 de enero de 2010	26-01-2010 al 11-12- 2010 10 meses, 15 días	Prestar servicios técnicos de carácter temporal impartiendo formación profesional dentro de los programas que el centro de formación ejecute	1 mes, 8 días
26	No. 105 Suscrito el 01 de abril de 2011	01-04-2011 al 30-06- 2011 3 meses	Contratar los servicios personales de un instructor de carácter temporal en el área de teleinformática para desarrollar formación titulada y complementaria	3 meses, 19 días
27	No. 173 Suscrito el 12 de julio de 2011	12-07-2011 al 17-12- 2011 5 meses, 5 días	Contratar los servicios personales de un instructor de carácter temporal en el área de teleinformática para desarrollar formación titulada y complementaria	11 días
28	No. 048 Suscrito el 23 de enero de 2012	23-01-2012 al 21-06- 2012 4 meses, 29 días	Contratar los servicios personales de carácter temporal como instructor para desarrollar acciones de formación profesional	1 mes, 5 días

29	No. 195 Suscrito el 17 de julio de 2012	17-07-2012 al 08-12-2012 4 meses, 21 días	Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación profesional	25 días
30	No. 541 Suscrito el 01 de febrero de 2013	01-02-2013 al 30-11-2013 10 meses	Prestación temporal de servicios tecnológicos de un instructor para desarrollar acciones de formación profesional titulada y/o complementaria	1 mes, 23 días
	Adición y prorroga No. 001 Suscrita el 15 de noviembre de 2013	01-12-2013 al 13-12-2013 13 días	Adiciona 13 días	N/A
31	No. 525 Suscrito el 21 de enero de 2014	21-01-2014 al 30-08-2014 7 meses, 9 días	Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral	1 mes, 7 días
	Adición	01-09-2014 al 30-11-2014 3 meses		N/A
32	No. 482 Suscrito el 27 de enero de 2015	27-01-2015 al 01-12-2015 10 meses y 4 días	Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral	1 mes, 27 días

b. Se aportaron varios comprobantes de pago/egresos de los servicios contratados.

c. De acuerdo con lo acreditado en el plenario, el demandante prestó los servicios en los siguientes periodos:

- Del 24 de febrero de 1999 al 21 de diciembre de 2001.
- Del 1° de abril al 12 de agosto de 2002.
- Del 17 de febrero al 27 de junio de 2003.
- Del 29 de septiembre de 2003 al 27 de febrero de 2004.
- Del 28 de mayo de 2004 al 15 de marzo de 2007.
- Del 4 de julio al 15 de diciembre de 2007.
- Del 4 de abril al 4 de noviembre de 2008.
- Del 2 de julio de 2009 al 11 de diciembre de 2010.
- Del 1° de abril de 2011 al 1° de diciembre de 2015.

Algunas interrupciones se justifican por el receso de las actividades académicas de mitad y de fin de año (vacaciones). Por ese motivo, la vinculación del instructor se realizaba durante los periodos de febrero a mayo, y de julio a diciembre, y esa situación se prolongó durante más de 15 años.

b.- En lo relacionado con el elemento *subordinación*, no existe duda que la vinculación del actor tuvo vocación de permanencia, porque la sumatoria de los plazos de ejecución de los diferentes contratos arroja 12 años, 4 meses y 20 días²⁶. Y de acuerdo con lo que manifestaron los dos deponentes (Irizar Hugo Embus Salazar y Jorge Antonio Castillo Solórzano), el actor debía desplazarse a lugares previamente determinados en zona urbana y rural de los municipios de La Plata, Nátaga y Tesalia Huila, en Páez-Belalcázar e Inzá (Cauca).

De otro lado, las labores debía realizarlas siguiendo directrices y cumpliendo programas académicos diseñados por la entidad accionada; siendo del caso recordar que la docencia no se desarrolla en el marco de la coordinación propia de los contratos de prestación de servicios; porque la misma se lleva a cabo atendiendo las órdenes y orientaciones de los directivos. De suerte que el instructor no puede actuar guiado por

²⁶ Los contratos de prestación de servicios se suscribieron del 24-02-1999 al 23-05-1999, del 16-07-1999 al 15-10-1999, del 8-10-1999 al 7-12-1999, del 16-02-2000 al 15-05-2000, del 9-05-2000 al 8-07-2000, del 25-7-2000 al 24-09-2000, del 10-11-2000 al 24-12-2000, del 02-03-2001 al 01-06-2001, del 24-05-2001 al 23-07-2001, del 10-08-2001 al 09-10-2001, del 03-10-2001 al 02-12-2001, del 05-12-2001 al 21-12-2001, del 01-04-2002 al 30-06-2002, del 13-06-2002 al 12-08-2002, del 17-02-2003 al 27-06-2003, del 29-09-2003 al 27-02-2004, del 28-05-2004 al 27-08-2004, del 15-09-2004 al 29-12-2004, del 28-12-2004 al 30-06-2005, del 11-08-2005 al 31-12-2005, del 01-01-2006 al 30-09-2006, del 03-08-2006 al 28-12-2006, del 29-12-2006 al 15-03-2007, del 04-07-2007 al 15-12-2007, del 04-04-2008 al 03-10-2008, del 05-10-2008 al 04-11-2008, del 02-07-2009 al 17-12-2009, del 26-01-2010 al 11-12-2010, del 01-04-2011 al 30-06-2011, del 12-07-2011 al 17-12-2011, del 23-01-2012 al 21-06-2012, del 17-07-2012 al 08-12-2012, del 01-02-2013 al 30-11-2013, del 01-12-2013 al 13-12-2013, del 01-09-2014 al 30-11-2014, y del 27-01-2015 al 01-12-2015.

su propia iniciativa y gobierno. Máxime, si se tiene en cuenta que los instructores deben sujetarse a la jornada laboral y al calendario académico institucional.

En tal virtud, es menester colegir que la subordinación y la dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, es decir, es connatural al ejercicio docente.

Ello es tan evidente, que en la prueba testifical se pudo establecer que el coordinador académico elaboraba y entregaba los diseños curriculares, impartía directrices y supervisaba el cumplimiento de las funciones y el horario de todos los instructores, sin importar el tipo de vinculación (de planta o de contrato).

Aunque el demandante no probó que las labores que él desarrolló estuvieran asignadas a otro servidor de planta; no existe duda que *impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación académica* hacen parte de la misión institucional del Sena; siendo pertinente recordar, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 119 de 1994 dicha entidad es el "...encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país" (subrayado propio).

31

Teniendo en cuenta que la formación académica que se le asignó al señor Jael Trujillo Sepúlveda es una labor inherente al Sena; siguiendo el precedente de la jurisdicción contencioso-administrativa; no existe duda que la contratación permanente ocultó una verdadera relación laboral. Aunado al hecho de que la demandada no demostró que su nómina fuera insuficiente para desarrollar las labores encomendadas.

c.- En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se declarará la nulidad parcial del oficio 2-2018-001114 del 26 de julio de 2018, suscrito por la Subdirectora del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila – Servicio Nacional de Aprendizaje; y a título de restablecimiento el derecho, se reconocerán las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de servicio (que no se haya afectado por la prescripción); las cuales, serán liquidadas teniendo en cuenta el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

d.- Como ya se indicara, está probado que el accionante laboró (a través de órdenes/contratos de prestación de servicios) en varios periodos debidamente diferenciados, porque entre uno y otro medio un tiempo superior a 30 días, y algunas interrupciones se justifican por el receso

de las actividades académicas en los periodos de vacaciones de mitad y fin de año (de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones expedidas en cada anualidad por el director de la entidad²⁷):

- Del 24 de febrero de 1999 al 21 de diciembre de 2001.
- Del 1° de abril al 12 de agosto de 2002.
- Del 17 de febrero al 27 de junio de 2003.
- Del 29 de septiembre de 2003 al 27 de febrero de 2004.
- Del 28 de mayo de 2004 al 15 de marzo de 2007.
- Del 4 de julio al 15 de diciembre de 2007.
- Del 4 de abril al 4 de noviembre de 2008.
- Del 2 de julio de 2009 al 11 de diciembre de 2010.
- Del 1° de abril de 2011 y el 1° de diciembre de 2015.

e.- Teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales se radicó el 16 de julio de 2018; es evidente, que frente a los derechos derivados de los primeros 8 periodos operó la prescripción trienal (porque la interrupción entre cada uno de ellos fue superior a 30 días, incluyendo la que hubo entre el penúltimo y el último periodo); pero no ocurrió con el lapso comprendido entre el 1° de abril de 2011 al 1° de diciembre de 2015.

Merced a lo anterior, solo se reconocerán las prestaciones sociales del anterior periodo.

32

f.- Es pertinente recordar que la prescripción no se aplica a los aportes a pensión²⁸; los cuales, se deben cancelar al fondo de pensiones en el que se encuentre afiliado, y se deben liquidar con base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Desde luego, únicamente la cuota parte que le correspondía al Sena como empleador.

A su vez, el demandante debe acreditar las cotizaciones realizadas, y en el evento de que no lo hubiera hecho, le corresponde satisfacer esa obligación.

²⁷ Resolución 1094 del 4 de octubre de 1999
Resolución 2424 del 10 de noviembre de 2006
Resolución 2679 del 15 de noviembre de 2007
Resolución 2908 del 21 de octubre de 2008
Resolución 3199 del 5 de noviembre de 2009
Resolución 261 del 3 de marzo de 2011
Resolución 1928 del 25 de octubre de 2011
Resolución 1945 del 5 de octubre de 2012
Resolución 1861 de 31 de octubre de 2013
Resolución 70 del 20 de enero de 2015

²⁸ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

Huelga precisar que de acuerdo con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, los aportes a pensión se deben girar al ente de previsión al que estuvo vinculado el demandante durante el tiempo que duró la relación laboral reconocida, sin que sea admisible ordenar el pago directo (aunque lo hubiera hecho a título de contratista)²⁹.

g.- Para liquidar las sumas adeudadas, los valores serán ajustados en los términos consagrados del artículo 192 del CPACA, dando aplicación a la siguiente fórmula:

$$Vp= Vh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

Donde el valor presente (Vp) se determina multiplicando el valor histórico (Vh), que es la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final del IPC certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el IPC vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mensualidad, o de la prestación y así sucesivamente.

h.- Como la declaratoria de la existencia del contrato realidad no le confiere al demandante la calidad de empleado público; no es posible acceder al reconocimiento de la sanción moratoria derivada del pago tardío de la cesantías; porque solo con la ejecutoria de la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral se hacen exigibles los derechos laborales salariales y prestacionales (incluyendo las cesantías), y a partir de ese momento surge para la entidad la obligación de pagarlas en los términos legalmente señalados³⁰.

i.- En lo relacionado con la devolución de los aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales; en la reciente sentencia de unificación citada *ad supra*, el H. Consejo de Estado precisó que es improcedente porque los recursos de la Seguridad Social son rentas parafiscales; por tanto, son un pago de obligatorio cumplimiento y no constituye un crédito a favor del interesado:

"... los recursos del sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en virtud de esa naturaleza parafiscal,136 estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito en favor del interesado, por lo que, independientemente, de que se hayan prestado o no los servicios sanitarios, su finalidad no se altera y permanece para garantizar la

²⁹ Ver sentencia del 25 de mayo de 2017, proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

³⁰ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Radicación: 50001-23-33-000-2010-00606-01(1586-16).

sostenibilidad del sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer».137 Puesto que corresponde al contratista sufragar dicha contribución, en tanto está obligado a hacerlo por la ley138, no es posible ordenar su devolución así se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, ya que, de admitirse tal pretensión, se le estaría otorgando «un beneficio propiamente económico, que no influye en el derecho pensional como tal.

237. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto y frente a lo requerido por la demandante, se tiene que no hay lineamientos jurídicos que permitan la posibilidad de la devolución de los aportes a salud que efectuó como contratista, comoquiera que estos fueron debidamente cotizados al sistema general de Seguridad Social en salud, al existir una obligación legal de realizar dicha contribución...”.

j.- En lo relacionado con la devolución del valor de las pólizas que otorgó el demandante para garantizar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios; es pertinente resaltar, que en el sub lite no se cuestionó la legalidad de los mismos, sino la desnaturalización en su desarrollo y en su ejecución. Y en la medida en que la normatividad vigente exigía que el demandante amparara el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a través de la constitución de una póliza de seguros (artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993); no existe justificación para deprecar el reintegro de las sumas en ellas invertidas; ya que se hicieron por ministerio legal, y no puede considerarse que son parte de las prestaciones derivadas de la existencia del contrato realidad.

k.- Respecto al reintegro de los valores pagados por impuestos a los entes territoriales, se precisa que estos se efectuaron por disposición legal, no siendo parte de las prestaciones derivadas de la existencia del contrato realidad.

l.- Concerniente a la solicitud de devolución de los dineros descontados por concepto de *retención en la fuente*, es menester recordar, que en opinión del H. Consejo de Estado ese tópico no es susceptible de discutirse en el medio control de nulidad y restablecimiento del derecho laboral, como quiera que el reembolso de ese tributo se debe surtir ante la Dian, y en el mismo no tiene ninguna injerencia la entidad demandada:

“«[...] se abstiene de emitir algún pronunciamiento sobre el particular, en la medida en que este es el cobro anticipado de un impuesto, que bien puede ser el de renta por los honorarios percibidos por el actor al suscribir los Contratos de Prestación de Servicios, cuyo trámite de devolución debe realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN una vez hubiese presentado la declaración de renta, empero, como en el sub-judice no existe siquiera prueba sumaria de que ello hubiere ocurrido, no están los elementos de juicio suficientes, y si en gracia de discusión existieran, la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho por controversias laborales no es la idónea para ventilar dicha pretensión [...]»³¹/³².

5.- Costas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA³³, en concordancia con el artículo 47³⁴ de la Ley 2080 de 2020³⁵; y en la medida en que no se advierten conductas dilatorias o temerarias de la parte demandada; amén de que no se encuentran acreditados los gastos ordinarios. En tal virtud, no se condenará costas.

6.-Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 23 de noviembre de 2021, y en su lugar:

PRIMERO.- Declarar la nulidad parcial del Oficio 2-2018-001114 del 26 de julio de 2018; Suscrito por la Subdirectora del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila – Servicio Nacional de Aprendizaje; a través del cual, le negó al demandante la existencia de la relación laboral que se gestó i) entre el 24 de febrero de 1999 y el 21 de diciembre de 2001, y ii) entre el 1º de abril y el 12 de agosto de 2002, iii) entre el 17 de febrero y 27 de junio de 2003, iv) entre el 29 de septiembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004, v) entre el 28 de mayo de 2004 y el 15 de marzo de 2007, vi) entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2007, vii) entre el 4 de abril y el 4 de noviembre de 2008, viii) entre el 2 de julio de 2009 y el 11 de diciembre de 2010 ix) entre el 1º de abril de 2011 y el 1º de diciembre de 2015.

³¹ Sentencia del 13 de junio de 2013, actor Alejandro Gómez Rodríguez, demandado: Hospital San Fernando de Ama ESE. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.

³² H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 6 de octubre de 2016. M.P. Dr. William Hernández Gómez. Radicación: 68001-23-31-000-2009-00146-01(1773-15).

³³ Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

³⁴ "Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de objeto".

³⁵ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre el señor JAEL TRUJILLO SEPULVEDA y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA existió una relación de naturaleza laboral durante los siguientes lapsos: i) entre el 24 de febrero de 1999 y el 21 de diciembre de 2001, y ii) entre el 1° de abril y el 12 de agosto de 2002, iii) entre el 17 de febrero y 27 de junio de 2003, iv) entre el 29 de septiembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004, v) entre el 28 de mayo de 2004 y el 15 de marzo de 2007, vi) entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2007, vii) entre el 4 de abril y el 4 de noviembre de 2008, viii) entre el 2 de julio de 2009 y el 11 de diciembre de 2010 ix) entre el 1° de abril de 2011 y el 1° de diciembre de 2015.

SEGUNDO.- Declarar la prescripción de los derechos salariales y prestacionales derivados de la relación de trabajo gestada i) entre el 24 de febrero de 1999 y el 21 de diciembre de 2001, y ii) entre el 1° de abril y el 12 de agosto de 2002, iii) entre el 17 de febrero y 27 de junio de 2003, iv) entre el 29 de septiembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004, v) entre el 28 de mayo de 2004 y el 15 de marzo de 2007, vi) entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2007, vii) entre el 4 de abril y el 4 de noviembre de 2008, viii) entre el 2 de julio de 2009 y el 11 de diciembre de 2010; salvo los aportes a pensión.

TERCERO.- Ordenar al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, reconocer y pagar al señor JAEL TRUJILLO SEPULVEDA las prestaciones sociales causadas entre el 1° de abril de 2011 y el 1° de diciembre de 2015; las cuales, serán liquidadas con base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

36

Las sumas resultantes se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO.- Declarar, que para efectos pensionales, se deben computar los periodos comprendidos entre: i) entre el 24 de febrero de 1999 y el 21 de diciembre de 2001, y ii) entre el 1° de abril y el 12 de agosto de 2002, iii) entre el 17 de febrero y 27 de junio de 2003, iv) entre el 29 de septiembre de 2003 y el 27 de febrero de 2004, v) entre el 28 de mayo de 2004 y el 15 de marzo de 2007, vi) entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2007, vii) entre el 4 de abril y el 4 de noviembre de 2008, viii) entre el 2 de julio de 2009 y el 11 de diciembre de 2010 ix) entre el 1° de abril de 2011 y el 1° de diciembre de 2015.

En tal virtud, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA le cancelará los correspondientes aportes patronales al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el accionante. Para dicho efecto la entidad debe calcular el ingreso base, de acuerdo con los honorarios pactados; pero solo la cuota parte que le correspondía como empleador (si no se

hubiere hecho). A su vez, el demandante debe cancelar el porcentaje que le corresponda, en caso de no haberlo hecho.

QUINTO.- Denegar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO.- Sin condena en costas en ambas instancias.

SÉPTIMO.- La sentencia se debe cumplir en el término establecido en el artículo 192 del CPACA.

OCTAVO.- Expídanse las copias con destino a la entidad pública como a la parte actora, con las constancias correspondientes.

NOVENO.- En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen.

Notifíquese.

(firmado electrónicamente)
RAMIRO APONTE PINO
Magistrado

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
Magistrado
-Ausente con permiso-

(firmado electrónicamente)
MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ
Magistrado